

INTERVENCION Y VIOLENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

En el número 285 de ECA, correspondiente a Julio de 1972, manifestábamos nuestra desaprobación a la intervención de la Universidad de El Salvador, por parte del gobierno del Coronel Arturo Armando Molina. En aquella ocasión, pocos días después de que los tres poderes del Estado actuaran conjuntamente en la operación militar de toma del alto Centro de Estudios, expresamos: "Que la Universidad de El Salvador necesitaba cierto saneamiento, era un sentir bastante generalizado en amplios sectores nacionales. La pregunta es ¿podemos estar de acuerdo con ESTE tipo de saneamiento? El camino adoptado ¿es realmente un camino acertado? Como salvadoreños y como universitarios, como hombres convencidos del valor de la auténtica democracia (de la democracia de hechos y no de palabras) tenemos serias dudas y sentimientos encontrados".

Han pasado más de cinco años de aquellos acontecimientos que dieron lugar a la destitución de las autoridades universitarias y de su expulsión inconstitucional del territorio nacional. Cinco largos años en que hemos confirmado que la actitud simplista entonces adoptada, de poner "orden" desde arriba en el seno de la Universidad, era más que equivocada. Los hechos se han encargado de demostrar que si la Universidad de El Salvador padecía de los efectos infantiles del comunismo —enfermedad sectaria y dogmática que antepone la ideología de un sector al resto del demos universitario con serio deterioro de los valores científicos y académicos— la intervención efectuada por el gobierno fue un mal incalculable, en tanto ha generado un clima de violencia e incertidumbre en la Universidad, con grave desplome de los propios estudios, muchas veces suspendidos y en niveles muy bajos dentro de las exigencias de la educación superior latinoamericana.

La UCA y la Universidad Nacional de El Salvador son entidades que, con estilo distinto, sirven al mismo fin: educar al pueblo salvadoreño y proporcionarle a la sociedad los elementos capaces que necesita para su desarrollo económico, social y político. El compromiso adquirido con la juventud del país exige, en consecuencia, una capacidad ética y racional para abordar con sinceridad los hechos relevantes que ocurran en el ámbito de ambas universidades. Por ello nuestra preocupación frente a la realidad que vive la Universidad de El Salvador, cuando el deterioro institucional y la amenaza a la autonomía de la cultura causan daños irreparables a la vida y misión de las universidades en nuestro país.



De ahí nuestra voz de protesta por la intervención político-militar del Estado en Julio de 1972 y por los actos posteriores que violan la autonomía universitaria, consagrada en el Art. 204 de la Constitución Política de la República.

En un desesperado intento de superar la crisis académica, docente, administrativa y política de la Universidad de El Salvador, se recurrió recientemente al expediente de reformar la Ley Orgánica de la institución, emitida el 13 de octubre de 1972. Al parecer, dicho instrumento jurídico no resultó idóneo para mantener el clima "apolítico", "neutro", de orden jerárquico estamental que se pretendió crear después de la intervención del 19 de julio de ese mismo año. Nos inquieta, hondamente, que ante cada problema estudiantil que se presenta la Asamblea Legislativa reforme la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, sin oír el parecer de los distintos gremios profesionales, sin escuchar a los catedráticos del Alma Máter y sin tomar en cuenta las aspiraciones e inquietudes de los sectores estudiantiles a quienes se pretende educar.

Si la estructuración del gobierno en la Universidad Nacional de El Salvador, tal como se establece en la última reforma, resolviese la crisis general de todo el organismo universitario, la medida, aunque autoritaria, habría constituido una forma de lograr la estabilidad académica y administrativa del Centro de Estudios. En la práctica la reforma es adversada violentamente por el estudiantado, por numerosos catedráticos que guardan silencio por temor a represión burocrática, y por muchos profesionales que se oponen a que la Universidad se convierta en una trinchera de luchas enconadas por el manejo del presupuesto, el control de los cargos principales, y el mantenimiento de una disciplina que, lejos de armonizar la vida docente, ha cobrado ya sus primeras víctimas.

Las víctimas han sido, hasta el momento, el propio Rector de la Universidad de El Salvador, Dr. Carlos Alfaro Castillo, acribillado a balazos juntamente con su motorista señor Jorge Antonio López Argueta, y el guardaespaldas señor Francisco Humberto Ramírez Benítez, en hecho criminal ocurrido el 16 de septiembre de 1977. Del asesinato del Rector y acompañantes se responsabilizó el grupo guerrillero denominado Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí".

La intervención de la Universidad de El Salvador, de julio de 1972 a la fecha, tiene una secuencia de odios, violencia, atropellos, censuras dentro del claustro universitario, creación de organismos armados dentro del Alma Máter. En suma, una serie de despropósitos que nada tienen que ver con una institución académica, seria, responsable de la formación de cuadros científicos, técnicos y humanísticos al servicio de la patria.

El asesinato del Rector Alfaro Castillo nos conmueve y nos hace reflexionar con preocupación sobre el futuro de la Universidad Nacional de El Salvador. El Consejo Superior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas condenó públicamente ese asesinato y nosotros también lo repudiamos desde estas páginas. No es posible, sin embargo, desligar la actuación del Rector desaparecido con la situación de violencia de la Universidad, así como no podemos ignorar que la gravedad de los hechos sociales en determinado país llevan a la juventud a actuar, a veces inconscientemente, en hechos deplorables como son la pedrea, el tumulto y la venganza política por medio de las armas.





Vivimos tiempos difíciles, es cierto, pero no vamos a volvernos escépticos ante el porvenir. Creemos que no es con la violencia como van a resolverse las cuestiones educativas en El Salvador. Si en otras esferas los hombres armados se enfrentan para debatir sus diferencias, en la Universidad tiene que ser el diálogo, la razón, la tolerancia, el respeto y la comprensión los que deben imponerse. No se puede discutir ni analizar un problema, una idea, una cuestión de fondo, si quienes participan en el convivio universitario están armados con bombas y metralletas. La Universidad se ha creado, precisamente, para el cultivo de la mente y del espíritu, no para dogmatizar ni sectarizar, menos aún para fomentar el despotismo, por muy ilustrado que sea.

Debemos tener presente que la Universidad, de cualquier tipo que sea, es un reflejo de los conflictos sociales existentes en la sociedad. La cultura y la ciencia se aprenden en medio de un debate sobre los problemas de la vida cotidiana, en cuya batalla están presentes valores caducos frente a valores nuevos, ideas permanentes y universales frente a supersticiones y dogmas. Las universidades, en nuestro país, no son islas, sino el centro mismo donde crece y florece la conciencia crítica de la nación. Sin la voz libre y abierta del quehacer universitario el país estaría a oscuras, a tientas, presa fácil de los enemigos de la inteligencia y el progreso social.

No es suficiente decir que sentimos la muerte del Rector Alfaro Castillo. Nuestra condición universitaria, humanística y cristiana, nos grita que no es suficiente. Hay que deplorar su muerte y buscar las causas de la violencia que la engendró.

En medio de la noche que vive el país, en una confusión que maltrata el espíritu de las instituciones, nosotros afirmamos con toda convicción: las universidades se hacen y se gobiernan con amor, con dedicación incondicional a la ciencia y la cultura, con profundo respeto a la pluralidad ideológica de las personas que enseñan y aprenden, en una entrega que tiene por fin último el mejoramiento integral del país.

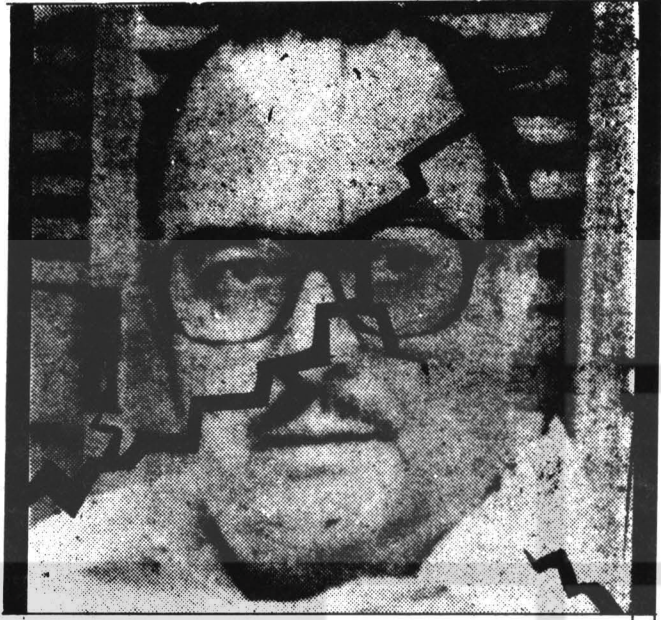
SOMOZA, LA ENFERMEDAD DE NICARAGUA

Las agencias noticiosas internacionales nos han traído la noticia: el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza hijo, se encuentra gravemente enfermo del corazón. El "hombre fuerte", representante de la dinastía que por cuarenta y tres años ha sometido al pueblo nicaragüense, se ha visto obligado a trasladarse a Miami para un delicado tratamiento médico.

Centroamérica está a la expectativa de lo que pueda ocurrirle a Somoza. Su eventual retiro de la política nicaragüense podría dar lugar a un desplazamiento de personalidades y grupos políticos, hasta ahora marginados del proceso de democratización del hermano país. Nicaragua vive una horrorosa dictadura en la que se violan los derechos humanos, se coartan las libertades públicas y ciudadanas, se persigue a la prensa y se hace escarnio del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

Por más de cuatro décadas la familia Somoza se las ha ingeniado para acumular poder económico, político y militar, en triángulo que hace imposible el desarrollo de las instituciones democráticas y liberales. Tal concentración de poder, única en la región, ha convertido a Nicaragua poco menos que en una hacienda, en la cual unas pocas familias privilegiadas sojuzgan a un pueblo vigoroso, creativo y desafortunado.

Los actos de rebeldía contra los Somoza suman cientos, todos fracasados por la cohesión político-militar y el amparo y tolerancia de funcionarios del Departamento de Estado de E.E.U.U. que, de una u otra manera, han fortalecido al régimen pseudoliberal de Nicaragua. Los emigrados nicaragüenses diseminados a lo ancho y largo de América son un ejemplo de la intolerancia e inflexibilidad del régimen. Organizaciones mundiales pro derechos humanos, Amnesty International por ejemplo, publican a menudo largas listas con nombres de presos políticos, desaparecidos, torturados y "muertos en forma accidental" en las cárceles de Nicaragua.



La mala imagen de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, encuentra su máxima expresión en Nicaragua. En este país, llamado a un mejor destino por la laboriosidad e inteligencia de sus hombres, el fraude electoral y la represión han alcanzado niveles increíbles. La crisis de la democracia liberal en Nicaragua surge, precisamente, en el momento en que se asesina a Augusto César Sandino y se instala en el gobierno el primer Anastasio Somoza. Desde entonces, apoyada en la corrupción y en la fuerza de las bayonetas, la familia Somoza no ha soltado la presidencia de la República y, por el contrario, ha consolidado un verdadero régimen de terror y miseria para el pueblo nicaragüense.

Podría decirse, sin eufemismo, que Somoza es la enfermedad de Nicaragua. Una lacra que corroe el cuerpo social, que envilece las instituciones republicanas, que daña la moral pública, que mantiene en postración y humillación a los nicaragüenses. Esta enfermedad llamada Somoza se extiende a las otras naciones centroamericanas por medio de empresas industriales y financieras de dudosa reputación, de origen viciado por cuanto se han constituido con dinero mal habido y, naturalmente, a la sombra del poder público. La fortuna de los Somoza es una de las más grandes del mundo; sus inversiones cubren líneas aéreas, compañías navieras, empresas textiles, de plásticos, cemento, aluminio, además de extensas propiedades en áreas rurales y urbanas.

Somoza, el enfermo cardíaco, no está solo. Tras él hay, por lo menos, tres herederos en sucesión directa a la corona de la República de Nicaragua. Gran paradoja ésta de los presidentes "coronados" en países, donde, a pesar de la lucha cotidiana, el sol libertario tarda en aparecer.

En tanto los acontecimientos prosiguen, esperemos a ver que le pasa a Somoza, el dictador postrado, en una nación donde él mismo es la gran enfermedad.